

# Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Resolución de 10 octubre

[JUR\2014\258377](#)



**CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:** Contrato de servicio de apertura de biblioteca regional en periodos fuera del horario habitual: licitación: pliego de cláusulas administrativas particulares: exigencia de clasificación: improcedencia: nulidad procedente.

**Jurisdicción:** Vía administrativa

**Recurso nº 514/2013 C.A. de la Región de Murcia 027/2013**

**Resolución nº 444/2013**

## **RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES**

En Madrid, a 10 de octubre de 2013.

**VISTO** el recurso interpuesto por D.<sup>a</sup> R.S.M., en representación de SERRAL, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, S.L.U, contra su exclusión del contrato de servicio de apertura de la Biblioteca Regional de Murcia en periodos fuera del horario habitual, exped. SG/CA/14/2013, de la Consejería de Cultura y Turismo de la C.A. de Murcia, el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

#### **PRIMERO**

Mediante anuncios publicados en el Perfil del contratante, y en el BOR de Murcia de 17-7-2013, se convocó licitación por procedimiento abierto del contrato de servicios de apertura de la Biblioteca Regional de Murcia en periodos fuera del horario habitual, exped. SG/CA/14/2013, con un presupuesto de licitación total de 193.977,91 eu y un valor estimado de 320.624,64 eu.

#### **SEGUNDO**

El PCAP señalaba:

" 2.1. El contrato a suscribir tiene por objeto el **SERVICIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA REGIONAL FUERA DEL HORARIO HABITUAL**, figurando en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación una descripción pormenorizada de la prestación objeto del contrato.

2.2. La codificación correspondiente a la clasificación estadística de productos por actividades (CPA), aprobada por [Reglamento \(CE\) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 \(LCEur 2008, 858\)](#) es 91.01.11. (Servicio de bibliotecas) y del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) aprobado por el [Reglamento 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 \(LCEur 2008, 430\)](#) es: 92511000-6 (Servicios de Bibliotecas)."

"12.1. Los interesados en concurrir a la licitación de la presente contratación, deberán acreditar haber obtenido la clasificación correspondiente al Grupo M, Subgrupo 5,

## Categoría A."

Asimismo, en la parte referida a la documentación que debería aportarse, se señalaba.  
"13.2. El SOBRE Nº 1: "Documentación general, contendrá los siguientes documentos:

### 13.2.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

- En caso de persona física, D.N.I. no caducado o documento que reglamentariamente le sustituya.

Sí el licitador fuera persona jurídica, Escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar copia autorizada del poder o testimonio del mismo, debidamente bastantado por el Servicio Jurídico de la Secretaría General de cualquier Consejería, Organismo Autónomo, o Empresa Pública Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea obligatoria dicha inscripción.

- Al indicado poder deberá acompañarse el documento nacional de identidad o documento que reglamentariamente le sustituya, del apoderado o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo.

- Empresas pertenecientes al mismo grupo: los licitadores, presentarán una declaración expresa responsable relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, presentarán declaración en este sentido.

13.2.3. Acreditación de la CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: certificado acreditativo de haber obtenido la clasificación correspondiente al Grupo M, subgrupos 5, Categoría A. La mencionada acreditación deberá ir acompañada de declaración responsable en la que manifieste que se mantienen las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión (Anexo VIII).

13.6. El licitador podrá presentar la documentación exigida en documento original, copia o fotocopia del mismo, debidamente legalizada o compulsada."

## TERCERO

La licitación se llevó a cabo de conformidad con el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por [Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) .

## CUARTO

La Mesa de Contratación acordó, en su sesión celebrada el día 2 de septiembre, requerir a la empresa SERRAL, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, S.L.U. para que subsanase los siguientes defectos apreciados en su documentación administrativa:

- No aporta original o copia compulsada de la escritura de constitución y de modificación, en su caso (aporta copia simple).

- No aporta original o copia compulsada de la escritura de poder a favor de D.ª Rosario Serral

Montore (aporta copia simple).

- No aporta bastanteo de poder del Servicio Jurídico de la Secretaría General de cualquier Consejería, Organismo Autónomo, o Empresa Pública Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a favor de D.<sup>a</sup> Rosario Serral Montore.

- No aporta DNI de la representante D.<sup>a</sup> Rosario Serral Montore.

- No aporta documentación acreditativa de la clasificación correspondiente al Grupo M, subgrupo 3, categoría A, de la Comunidad Autónoma de Murcia, o del Estado, ni declaración responsable sobre la vigencia de la clasificación y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento (aporta clasificación otorgada por la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, que le faculta únicamente para contratar en el ámbito de dicha Comunidad autónoma).

- No aporta declaración responsable relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del [Código de Comercio \(LEG 1885, 21\)](#) . En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, presentarán declaración en este sentido.

D.<sup>a</sup> Rosario Serral Montore, en nombre de la empresa antes referida, remitió un e-mail haciendo constar las siguientes "dos puntualizaciones": una, respecto del plazo de subsanación otorgado por la Mesa (hasta las 14:00 horas del día 6 de septiembre de 2013) y otra, en lo que interesa al objeto del recurso, sobre la exigencia de clasificación, al considerar que no es exigible en aplicación del artículo 65 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) . Con fecha 5 de septiembre, la Jefe de Servicio Económico y de Contratación le remitió e-mail en contestación a las puntualizaciones realizadas, ratificándose en las exigencias de subsanación.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y reunida nuevamente el día 9 de septiembre, la Mesa de Contratación acordó, ante la ausencia de presentación de documentación alguna por parte de la recurrente, excluirla del procedimiento.

#### QUINTO

Con fecha 19-9-2013 tuvo entrada este recurso especial, en que la excluida alega que, de conformidad con el art. 65 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) *"no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II."*; Entendiendo que el objeto de contratación de este servicio se corresponde con la realización de Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos, incluida en la categoría 26 y que quedarían exentas de la obligatoriedad de la exigencia de clasificación empresarial.

Entienden también que ello queda ratificado por la D. Transitoria quinta (vigente DT 4<sup>a</sup> [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) ) *"al indicar que estarán sujetas al régimen establecido en la misma los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, lo que implica que no puede ser aplicada cuando no se exige tal requisito, habida cuenta que en la LCAP (RCL 2000, 1380, 2126) estaban excluidos de tal requisito los servicios de las categorías 6 y 21, además de los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos de la categoría 26, y en el artículo 54 de la Ley 30/2007 (RCL 2007, 1964) se amplían los contratos de servicios excluidos de clasificación a los de las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del anexo."* Aporta, en apoyo de su tesis, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 9/11, de 15 de diciembre de 2011.

Como consecuencia, pide la anulación del procedimiento de contratación; No pide la suspensión cautelar del acto administrativo recurrido.

#### SEXTO

El órgano de contratación presenta informe en el que *"entiende, tal y como comunicó a la recurrente que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCS (RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) , continúa vigente el artículo 25 1 del TRLCAP (RCL 2000, 1380, 2126) , y éste no exime de clasificación la totalidad de los contratos comprendidos en la categoría 26 sino, de entre ellos, "los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de*

espectáculos", contratos que, por otra parte, son calificados como contratos privados (y, en consecuencia, exentos de clasificación) en el artículo 20.1 del [TRLCSF \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) , siendo así que existe en la vigente legislación sobre clasificación de empresas contratistas de servicios, dentro del Grupo M-servicios especializados, el Subgrupo 5- servicios de bibliotecas, archivos y museos, que ha sido el requerido en los Pliegos que rigen esta licitación como lo ha venido siendo, por otra parte, en las sucesivas convocatorias públicas sin que se haya presentado hasta este momento duda al respecto." Y cita, en apoyo a esta interpretación, el informe 37/08, de 25 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado o el Acuerdo 1/2008, de 30 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares. También el Acuerdo 14/2011, de 27 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid.

Asimismo, añade, "en aplicación de la doctrina de los actos propios, que "(...) los pliegos que elabora la Administración y acepta expresamente el licitador al hacer su proposición constituyen la ley del contrato y vinculan, según una constante jurisprudencia del Tribunal supremo español, tanto a la Administración contratante como a los participantes en la licitación, sin perjuicio de la eventual apreciación ulterior de vicios de nulidad de pleno derecho (...). La actora, al presentar su oferta, vino en aceptar incondicionalmente el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, en términos que ahora le impiden pretender desconocer o impugnar su contenido", tal y como recoge la Resolución 45/2011 de ese Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales."

#### SÉPTIMO

La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a las restantes empresas licitadoras en fecha 26 de septiembre de 2013 para que, si lo estimaban oportuno, formularan las alegaciones que convinieran a su derecho, sin que ninguna de ellas haya evacuado este trámite.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

##### PRIMERO

El presente recurso se califica por la empresa recurrente como especial en materia de contratación, interponiéndose ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de conformidad con lo previsto en el artículo 44.3 del Texto Refundido de la [Ley de Contratos del Sector Público \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) , siendo competente este Tribunal para resolverlo a tenor de lo establecido en el artículo 41 del mismo texto legal y el convenio firmado al efecto entre la Administración del Estado y la CA de Murcia de 5-11- 2012.

##### SEGUNDO

Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del citado [Texto Refundido \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) , al tratarse de un licitador.

##### TERCERO

La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44.2.a) del citado texto legal, al no haber transcurrido más de 15 días hábiles entre la fecha de notificación del acto impugnado y la de presentación del recurso.

##### CUARTO

El análisis de los requisitos de admisión del recurso debe llevarnos, asimismo, a la conclusión de que han sido interpuesto contra un acto susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del tantas veces referido texto legal.

##### QUINTO

Debemos comenzar por señalar, para centrar la cuestión, que la controversia, tanto en los argumentos del recurso como en el informe del órgano de contratación, se ha limitado al requisito de la clasificación, pero en nuestro caso la recurrente no ha subsanado otros defectos, referidos a la falta de originales o copias compulsadas y a la falta de cierta declaración responsable; Defectos que, en opinión de este Tribunal, serían suficientes para haberla excluido de la licitación al no haber sido subsanados, como ya se señaló en nuestra Resolución 154/2012, en que insistimos en la necesidad de aportar la documentación con sujeción a lo previsto en el PCAP; y éste, como hemos citado en los Antecedentes, exige en nuestro caso original o copia compulsada.

Ello, además, resulta conforme con el art. 46 de la [Ley 30/1992 \(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246\)](#), de Régimen Jurídico de las AAPP y PAC, que limita la validez de las copias presentadas en procedimientos administrativos a los casos en que conste su autenticidad.

Del propio modo, y de ser necesaria la clasificación, no era suficiente con aportar, como hizo la recurrente, la otorgada por otra Comunidad Autónoma, puesto que el artículo 68 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#), "Competencia para la clasificación.", señala: "1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Hacienda.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que los haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo."

#### SEXTO

Ahora bien, despejado lo anterior, debemos señalar que la recurrente hace un reproche que, de ser correcto, invalidaría parcialmente el PCAP, de conformidad con el art. 31 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) y, en consecuencia, todo el procedimiento de licitación subsiguiente, incluida la exclusión de la recurrente. Recordemos a mayor abundamiento que ésta no pide sólo la anulación del acto de exclusión, sino de todo el procedimiento de licitación.

Así, y pese a que la aquí recurrente no se opuso en su momento al PCAP, e incluso intentó cumplir con el mismo (al aportar una clasificación insuficiente), ello no es óbice para que pueda conocerse de su conformidad a Derecho por este Tribunal, si se denunciase una causa de nulidad de pleno Derecho: Así lo hemos declarado, por ej, en la Resolución 188/2012, en que decíamos. "Es cierto que el plazo de impugnación del anuncio y de los pliegos de licitación ya ha expirado, pero las alegaciones realizadas por la recurrente contra los mismos tienen su causa en un acto de aplicación de los pliegos que, como se argumenta en el fundamento sexto de esta resolución, se basa en una cláusula afectada por un vicio de nulidad de pleno derecho del artículo 32 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#), de manera que, si bien, tal y como ha afirmado reiteradamente este Tribunal, los pliegos son ley del contrato y vinculan tanto a la entidad contratante como a los licitadores, resulta posible recurrir contra el acto de aplicación de los mismos cuando están viciados de nulidad, como es el caso que nos ocupa.

El artículo 40.2 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) establece que pueden ser objeto del recurso especial en materia de contratación, entre otros actos, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación, así como los actos de trámite cualificados, entre los que se incluyen los actos de exclusión de los licitadores. Por tanto, teniendo en cuenta que en el presente caso la empresa recurre que se le haya excluido del procedimiento de licitación por presentar su proposición fuera de plazo con base en una cláusula nula de pleno derecho del pliego, debe entenderse que el recurso está interpuesto dentro del plazo legalmente previsto, al no haber transcurrido entre la notificación del acuerdo de exclusión y la interposición del mismo, más de los 15 días hábiles que establece el artículo 44.2 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#)."

Pues bien, debemos tener en cuenta que lo que se denuncia en nuestro caso es la exigencia de una clasificación, requisito de solvencia que no vendría impuesto por la legislación vigente: Y, a nuestro entender, en nuestro caso dicha irregularidad constituye una causa de nulidad de pleno derecho, aun no mencionada de modo expreso en el [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#), por aplicación del art. 32 del [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#), en relación con el art. 62 de la [Ley 30/1992, de 26 de noviembre \(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246\)](#) -al que se remite el art. 32 a) antedicho-, y el art. 54 y 62 del mismo [TRLCS \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#).



Así, pese a que la Jurisprudencia ha interpretado de modo restrictivo los supuestos de invalidez que dan lugar a la nulidad de pleno derecho, en nuestro caso entendemos que se incurre en la lesión de "derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional", que configura una de estas causas de nulidad de pleno derecho a tenor del art. 62.1 a) de la [Ley 30/1992 \(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246\)](#), por infracción de la igualdad ante la Ley y no discriminación amparada en el art. 14 de nuestra [Constitución \(RCL 1978, 2836\)](#).

Y ello, ya que las exigencias de solvencia, siempre vinculadas al objeto del contrato y proporcionales al mismo, suponen en sí mismas una restricción a la libre concurrencia en condiciones de igualdad que sólo son tolerables de no resultar palmariamente disconformes a Derecho, ya que, en caso contrario, suponen una exclusión indebida de los potenciales licitadores que no las reúnan, en perjuicio de su derecho a concurrir a la contratación en condiciones de igualdad.

Y no se puede olvidar que el principio de igualdad y no discriminación, junto con el favorecimiento de la concurrencia como base de la libre competencia, está en el propio origen de las Directivas que dieron lugar a la implantación de este recurso especial. Recordemos, a estos efectos, la insistencia de nuestra legislación en que la adjudicación de los contratos se sujete a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; siendo, en realidad, la publicidad y la transparencia principios instrumentales, en garantía de los principios fundamentales de la contratación: concurrencia y no discriminación, este último garantizado por nuestra Constitución como derecho fundamental. El propio art. 1 del [TRLRSP \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) señala que tal texto tiene por objeto garantizar (entre otros extremos) que la contratación del sector público se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, y de asegurar la salvaguarda de la libre competencia.

#### SÉPTIMO

Sentado lo anterior, y en cuanto a la exigencia de clasificación en nuestro caso, la redacción aplicable del artículo 65 del [TRLRSP \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#), referido a la "Exigencia de clasificación", indica: "1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II."

Asimismo, la Disposición Transitoria cuarta, "Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas", señala: "El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la [Ley de Contratos de las Administraciones Públicas \(RCL 2000, 1380, 2126\)](#)."

(...)"

Y tal art. 25 indica: "Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros, será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos."

Debemos partir de la consideración de que el objeto del contrato que nos ocupa está comprendido en la categoría 26 y no es "la creación e interpretación artística y literaria" ni es "de espectáculos". Por tanto, la cuestión se centra en considerar si, de conformidad con la D. Transitoria citada, debe entenderse aplicable la exención de clasificación de todos los contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II desde la entrada en vigor de la regulación que la

dispone -art. 65 del [TRLCSP \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) y su precedente en la [LCSP \(RCL 2007, 1964\)](#) -; o hay que espera al desarrollo reglamentario de tal artículo.

El informe de la Junta aducido por la recurrente llega (interpretando el art. 54 de la [LCSP \(RCL 2007, 1964\)](#) , precedente del 65), a una conclusión favorable a la inmediata aplicación de las exenciones, tras razonar por contra sobre la demora en la entrada en vigor de las nuevas exigencias de clasificación en tanto que requeridas de desarrollo reglamentario. Así, en la petición de informe, entre otros extremos, se decía: *"Congruentemente con lo expuesto se debería entender, aunque en el citado informe (el 37/08) no se hace ninguna referencia, que la demora en la aplicación del párrafo primero del artículo 54,1 de la [LCSP \(RCL 2007, 1964\)](#) afectaría también al régimen de exención de la exigencia de clasificación empresarial de las categorías de contratos de servicios recogidos en éste (categorías 6, 8, 21, 26, Y 27 del Anexo II de la [LCSP \[RCL 2007, 1964\]](#) ), manteniendo, pues, su vigencia las exenciones del artículo 25.1 del Texto Refundido."*

A lo que la Junta responde: *"La segunda (pregunta) versa sobre si los contratos de servicios incluidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del anexo II de la [LCSP \(RCL 2007, 1964\)](#) están excluidos o, en su defecto, sujetos a clasificación empresarial. Por la misma razón expresada en la consulta anterior, la clasificación no puede ser exigida porque así resulta del mandato de la Ley, que en el artículo 54 las excluye de tal requisito y lo confirma en la disposición transitoria quinta (vigente DT 4ª [TRLCSP \[RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\]](#) ) al indicar que estarán sujetas al régimen establecido en la misma los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, lo que implica que no puede ser aplicada cuando no se exige tal requisito, habida cuenta que en la [LCAP \(RCL 2000, 1380, 2126\)](#) estaban excluidos de tal requisito los servicios de las categorías 6 y 21, además de los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos de la categoría 26, y en el artículo 54 de la [Ley 30/2007 \(RCL 2007, 1964\)](#) se amplían los contratos de servicios excluidos de clasificación a los de las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del anexo. Opinar lo contrario daría lugar a generar una notable confusión entre los numerosos órganos encargados de la tramitación de los expedientes y entre las empresas."*

Pues bien, este Tribunal considera que debe atenerse a este criterio de la Junta que, por lo demás, es plenamente lógico y coherente: La demora en la entrada en vigor del art. 65 [TRLCSP \(RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106\)](#) (antes 54) es razonable en lo que se refiera a introducir novedosas clasificaciones, que necesitan desarrollo reglamentario para que se creen los grupos y subgrupos que, correspondiendo a tales actividades, permitan incorporar a los mismos a las empresas que hayan acreditado cumplir con los requisitos exigidos; Pero, por el contrario, una exención de clasificación no requiere de desarrollo reglamentario alguno para poder ser aplicada.

#### OCTAVO

Por ello, entendemos que no es correcta la exigencia de clasificación contenida en el PCAP, que se anula; La anulación parcial del PCAP debe llevar consigo, conforme a doctrina reiterada de este Tribunal, la anulación de todo el procedimiento de licitación, con el fin de que se redacte el pliego conforme a Derecho y se le dé de nuevo publicidad que permita una adecuada concurrencia.

Por todo lo anterior,

**VISTOS** los preceptos legales de aplicación,

**ESTE TRIBUNAL**, en sesión celebrada en el día de la fecha, **ACUERDA:**

#### Primero

Estimar el recurso interpuesto por D.ª R.S.M., en representación de SERRAL, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, S.L.U, contra su exclusión del contrato de servicio de apertura de la Biblioteca Regional de Murcia en periodos fuera del horario habitual, exped. SG/CA/14/2013, de la Consejería de Cultura y Turismo de la C.A. de Murcia; anulando la exigencia de clasificación contenida en el PCAP, con los efectos expresados en el Fundamento último de esta Resolución.

#### Segundo

Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del [TRLCSP \(RCL](#)

---

[2011, 2050 y RCL 2012, 106](#)).

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la [Ley 29/1998, de 13 de julio \(RCL 1998, 1741\)](#), Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Documento extraído de la fuente oficial del organismo emisor en consonancia con lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre.